

Lo tortuoso de la democratización mexicana

SAMUEL SCHMIDT

*Universidad de Texas en El Paso**

La discusión sobre la democratización es casi interminable, y difícil de resolver, porque no hay acuerdo sobre cuáles son los indicadores de la democracia (Fitzgibbon y Johnson, 1966; Busey James L., 1985). Parte del problema consiste en que la comparación de México y América Latina muchas veces se hace a partir de un paradigma explicativo basado en lo que podemos llamar el modelo estadounidense y su sistema valorativo (Gillin 1966), sin considerar que el contexto social, económico y cultural en ambos lados del análisis puede diferir.

Tradicionalmente, la discusión sobre la democracia mexicana, imbuida de escándalos de corrupción económica y política, ha creado la impresión que se trata de un país totalmente corrupto, con un sistema político dominado por un partido único, rodeado de partidos políticos títeres que se dejan manipular por el gobierno y por una oposición con muy poca fuerza como para representar una opción real. De ahí que las expectativas para el advenimiento de la democratización mexicana se hayan concentrado en torno a la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al mismo tiempo, hay que agregar que muchos mexicanistas han leído obras pesimistas sobre el país, que los han impactado. En este sentido, son importantes los libros de Paz (1982), Fuentes (1970) y Ramos (1934), autores bastante conocidos fuera de México, especialmente en Estados Unidos, que han sido la fuente de inspiración de una buena cantidad de los análisis contemporáneos sobre el sistema político mexicano.

También ha influido en esta percepción la falta de información sobre la elección del jefe de Estado, tal vez el proceso más importante del sistema político. En el caso de México, esto es relevante dada la imagen del presidente como un todopoderoso hasta el grado de imponer a su sucesor, de modo que, al no conocerse más detalles sobre su selección, el análisis tiende a caer en simplificaciones o prejuicios que se extienden a todo el sistema político, al que se califica a partir de un solo evento político.

* El autor es Profesor Asociado de Ciencia Política y Director del Centro de Estudios Inter Americanos y Fronterizos, Universidad de Texas en El Paso.

El prolongado monopolio de poder del PRI, que se inicia en 1929, también impacta el análisis y las percepciones sobre el sistema político. Desde esa fecha, el PRI ha ganado todas las elecciones presidenciales, controlando casi todas las gubernaturas, presidencias municipales, legislaturas locales y el congreso federal. Esto, combinado con el elevado papel que desempeña el presidente mexicano, pone de manifiesto una gran centralización del poder político, con escasas posibilidades de modificación. En 1988 la oposición avanzó en todos los terrenos, pero, para 1989, aunque perdió su primera gubernatura, el PRI recuperó votos en todas las elecciones locales (Schmidt, 1990) y una mayoría holgada en la Cámara de Diputados en 1991. Es tal vez por esto que no podemos asegurar que algunas victorias de la oposición impliquen que el sistema sea democrático, ni que las elecciones mexicanas estén libres de sospecha como para que se las pueda considerar como un indicador de democracia.

Aun cuando para 1992 hay gobernadores electos del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California y Chihuahua, y un gobernador panista designado en Guanajuato, a la vez que cientos de diputados locales y federales y presidentes municipales de oposición, la percepción sobre México es que sigue siendo un país autoritario y sin democracia, donde el fraude electoral es una práctica común. En los análisis comparativos sobre la democracia en América Latina (Fitzgibbon y Johnson, 1966), México nunca alcanza los lugares más altos (hasta 1960 estaba ubicado entre el quinto y sexto lugar). En un estudio reciente (Drake, 1989) que discute la influencia de la deuda en el paso de democracias a dictaduras y viceversa en América Latina, a México se le ubica, para 1982, en la columna de democracia, pero con un signo de interrogación. En cambio, es común encontrar que el país es percibido como un país autoritario con "*dictadura de un partido político*" o "*dictadura presidencial*"; aunque ésta sea sexenal, o como la "*dictadura perfecta*", tal y como la definió Mario Vargas Llosa.

En este artículo se discutirá el proceso de democratización mexicana combinada con su prolongada estabilidad política, se analizará la última gran ruptura política que sufrió el sistema en 1988, y se terminará con el esbozo de un escenario catastrófico para 1994.

Sucesión presidencial, estabilidad y democracia

México se ha destacado por su gran estabilidad política en el siglo XX. Comparado con los países latinoamericanos cuyos sistemas políticos han sufrido múltiples golpes de Estado, México ha logrado sucesiones presidenciales pacíficas y la resolución de las controversias derivadas de la lucha por el poder dentro de un marco institucional que se sostiene en una red de poder, consolidada por una gran lealtad y disciplina de parte de sus miembros. La escisión sufrida por el PRI en 1988 es la única escisión de

importancia desde 1929, fecha en la que se funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR), precursor del PRI, lo cual constituye un récord nada despreciable. Sin embargo, la transferencia pacífica del poder presidencial tiene poco que ver con la visión negativa que se tiene sobre México y sus procesos políticos, a los que se considera autoritarios.

En el presidente mexicano se concentra la capacidad de aprobación de los candidatos — desde gobernadores, senadores, diputados federales y locales, hasta presidentes municipales — y de ello proviene el gran poder que se atribuye a la designación presidencial, por el cual se compite y al cual se mantiene lealtad y disciplina. El presidente tiene la capacidad de hacer y deshacer carreras políticas, y de distribuir favores y recompensas, creando así un sistema de lealtades enfocado hacia él.

La disciplina de los actores políticos mexicanos ha generado respeto por los tiempos políticos. Se acepta que hay un proceso de renovación y se compite por ganar posiciones en cada coyuntura de cambio. El sexenio, el período presidencial de seis años, es en este sentido un valor político fundamental, que ha inhibido procesos de disrupción en la sucesión de administraciones gubernamentales. Los mexicanos tienen la certeza de la temporalidad del gobierno, y de su renovación cada seis años. De esta manera, la sucesión presidencial mexicana se ha convertido en el marco de competencia de los diversos grupos políticos, que históricamente se han configurado como camarillas (Camp, 1990).

En el pasado, la interacción entre camarillas le dio al sistema político mexicano una gran solidez y cohesión, si bien, paradójicamente, fortaleció su autoritarismo. Las camarillas, recuperando el valor político del cacicazgo¹ y del caudillismo, contribuyeron con su lealtad y disciplina a consolidar el sistema político. Los miembros de la camarilla le tienen gran lealtad al jefe de la misma y se disciplinan ante sus decisiones, tal vez porque son conscientes que el sistema y la camarilla siempre retribuirán los servicios prestados y hasta los sacrificios sufridos (Schmidt, 1991). Aun si ésta fuera la única consideración, es un incentivo bastante fuerte para lograr cohesión política.

El elemento *sui generis* de la política mexicana es que la competencia por el poder se ha generado — por lo menos hasta 1988 — dentro de los márgenes gubernamentales y dentro de un solo partido político, con un gran espíritu de disciplina y lealtad por parte de los derrotados. Las camarillas que perdían una competencia electoral esperaban pacíficamente hasta la próxima contienda, mientras trataban de reagrupar fuerzas y conquistar nuevas posiciones políticas, pero siempre con el ánimo que les da el ser miembros de la gran “familia revolucionaria”².

Aun cuando no hay estudios definitivos sobre la interacción de las camarillas, se puede percibir que uno de los marcos de competencia más disputados lo constituye el gabinete presidencial. En este espacio el presidente equilibra las diversas facciones geográficas y sectoriales que compiten por diversas posiciones de poder. Después de la revolución y hasta los 70, los

Secretarios de Estado utilizaban su puesto para establecer alianzas políticas y fortalecer posiciones de poder en el país. Este sistema tuvo un efecto autoritario en cuanto a la sociedad, pero de relativa democracia en el seno de la élite política, la cual tenía claras reglas de juego para competir por el poder y reclutaba líderes sociales que así se movilizaban socialmente, aceptando, a cambio, disciplinarse ante las decisiones generadas por un sistema autoritario que recompensaba la disciplina y lealtad. Esto ayudó a asegurar la estabilidad y a funcionalizar la protesta y oposición ante una lógica de poder que daba espacios de poder limitados a la disidencia dentro del marco autoritario.

Este esquema se ha modificado en las últimas dos décadas. El papel del gabinete presidencial se ha distorsionado, hasta convertirse en una especie de cuerpo gerencial cerrado para los amigos y colaboradores cercanos del presidente. Desde el surgimiento de los presidentes “*burócratas*”³, el gabinete se ha transformado en un espacio determinado más por un criterio de manejo burocrático, en lugar de continuar siendo un foco de competencia entre grupos políticos. El presidente recompensa la obediencia burocrática y no el mérito político, y el reclutamiento político se ve limitado a la élite económica.

Uno de los momentos que marcan esta transición ocurre cuando el gobierno plantea la descentralización administrativa y el fortalecimiento del municipio durante la administración de José López Portillo. El gobierno creó el Convenio Unico de Desarrollo (CUD), por medio del cual se establecen las transferencias federales a los estados, después de que éstas se negocian centralmente. Esta medida redujo la capacidad política de los secretarios del gabinete presidencial, que solamente administran programas, y debilitó el poder de los gobernadores, que administran recursos transferidos por el gobierno federal⁴.

La política de descentralización, que al transferir poder a los municipios eventualmente reforzaría la democracia, recentralizó el poder en las manos del presidente y del sector financiero del gobierno, reduciendo las posibilidades de democratización; al gerencializar la política, se reforzó el poder de los tecnócratas⁵ y se cancelaron canales de competencia política dentro de la élite. La consecuente reducción del papel del gabinete como instrumento de equilibrio de poder entre grupos, y la desestabilización del viejo sistema de poder donde los grupos corporativizados competían por cuotas de poder, dejaron a merced del presidente diversos procesos políticos. Semejante curso de acción debilitó las pautas de reclutamiento de los líderes, redujo las posibilidades de consolidar la apertura democrática y agudizó el autoritarismo. Este proceso causó decepción en los cuadros políticos medios y la oposición empezó a abrirse camino. Lo paradójico es que esto, que bien pudo haber sido el origen de un viraje democrático, acendró la negociación de las luchas electorales⁶ y reprodujo un sistema autoritario con participación de la oposición.

Otro componente para la concentración del poder político fue la política de apertura económica iniciada por Miguel de la Madrid y el abrazo del neo-

liberalismo, que incrementó de manera desmedida la influencia de los empresarios. Este cambio está modificando el modelo corporativo desarrollado en el PRI, donde los diversos sectores y segmentos sociales se integran al partido como componente orgánico del mismo para aglutinar a la sociedad civil y a la sociedad política bajo los designios de una élite política cohesionada (Gil, Schmidt y Castro, 1991; Schmidt y Gil, 1991 y Schmidt, 1991a). Los presidentes burócratas le quitan peso al aparato corporativo y generan mecanismos de control extra-partidarios, como el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que inició Carlos Salinas de Gortari y que está orientado a incrementar la popularidad y a cohesionar el apoyo popular alrededor del presidente, aun a costa del partido. Este es, tal vez, el primer caso de populismo tecnocrático en el mundo.

Para los presidentes "*políticos*" que gobernaron hasta 1970, la política era el arte de guiar a la sociedad bajo el marco de la paz social, aun cuando para lograr ésta se usara la represión extensamente. Este "*arte*" consistía, entre otros, en negociación, conciliación, cooptación, demagogia, represión y manipulación. La eficiencia podía absorber costos políticos porque la economía crecía, aunque éstos incluyeran la aplicación de lecciones ejemplares al movimiento obrero, como el encarcelamiento, desde 1958 hasta el principio de los 70, de los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, o las represiones sangrientas del movimiento obrero, campesino y estudiantil, cuando el movimiento de masas intentó salirse de la tutela corporativa.

En contraposición, para los presidentes "*burócratas*" que llegaron al poder en 1970, la eficiencia es un problema de contabilidad nacional e internacional⁷. Llama la atención la confrontación entre Miguel de la Madrid y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues mientras el primero demostraba que había conseguido un superávit en el "*presupuesto primario*", el cual excluía el servicio a la deuda y hacía de México un candidato para mejor trato financiero, el FMI insistía en reconocer el déficit fiscal. La principal preocupación del gobierno era mostrar que el desequilibrio económico era un problema técnico y no de estructura económica. Si el poder de compra descende, la migración indocumentada hacia Estados Unidos no se frena y la calidad de vida deteriora, no son éstos problemas que deba solucionar el gobierno, porque de eso se encargará la oferta y la demanda; lo que sí debe arreglar el gobierno es la estadística de los indicadores internacionales. La paradoja de esta situación ha sido que los presidentes burócratas se han preocupado de su imagen en el exterior, descuidando la situación política interna.

Las elecciones para gobernador en Guanajuato y San Luis Potosí en 1992 resultan aleccionadoras. En el primer caso, la protesta por el fraude electoral llevó al gobierno federal a presionar al gobernador electo a renunciar y en su lugar designaron un gobernador interino del Partido Acción Nacional (PAN). En el segundo caso, las protestas por el fraude electoral llevaron al gobernador recién inaugurado a tratar de entrar al palacio de gobierno por la fuerza y el

gobierno federal lo obligó a renunciar. Paradójicamente, sin darse cuenta, su mala política interna ha favorecido la participación de la oposición. Pero el avance es autoritario. Sigue siendo el poder central el que resuelve disputas, califica elecciones y negocia resultados electorales.

La falta de transparencia en la política es una barrera para la democracia, ya que aun los triunfos de la oposición sufren el castigo de la incredulidad. Cada victoria de la oposición sostiene al autoritarismo en lugar de apoyar la democracia. Es por esto que los accidentes democráticos como en Baja California y Chihuahua no garantizan nada. Los presidentes burócratas despolitizaron la política⁸ y convirtieron a los políticos en gerentes. Esto supone una consecuencia funesta para la democracia, porque excluye de la carrera política a una parte importante del liderazgo político tradicional, reemplazándolo por un sector social asociado a la élite y con una gran insensibilidad para la política de masas. De este modo, los triunfos de la oposición no garantizan el inicio de la democracia, en tanto que la concentración burocrática del poder puede destruir el avance democrático en un abrir y cerrar de ojos.

Cohesión priísta y efectividad gubernamental

Históricamente, la disciplina priísta ha facilitado que aquéllos desilusionados en elecciones a cualquier nivel sean recompensados dentro del sistema, permitiéndoles conservar posiciones de poder que les permitan competir en el futuro. El Partido de los Revolucionarios se consolidó como el medio para hacer política y aseguró que la competencia política por el poder se desarrollara dentro de cauces institucionales. La simbiosis entre partido y gobierno facilitó que el movimiento entre ambos se viera como algo natural y esperanzador. De hecho, el partido sirvió como instrumento para detectar conflictos y como salida lateral⁹ para políticos que no habían conseguido obtener mejores posiciones políticas. Como instrumento de reclutamiento de nuevos líderes, el partido era un recurso de renovación y movilidad en el sistema.

La sublimación del corporativismo mexicano, que se tradujo en la formación de los sectores obrero, campesino y popular del PRI, hizo de éste la única fuerza política y de gestión capaz de generar resultados concretos. Al mismo tiempo, la represión de las fuerzas no cooptables o controlables provocó el debilitamiento de la oposición. De esta manera, durante muchos años, la lucha de la oposición fue simbólica y poco efectiva.

Lo anterior no quiere decir que el PRI fuera un partido democrático; por el contrario, algunas de las luchas más importantes por su democratización terminaron en sendas derrotas para quienes las emprendieron. Tal es el caso de Carlos A. Madrazo (Hernández Rodríguez, 1991), cuya muerte en un accidente de aviación sigue sospechándose no fue accidental. Sin embargo, el PRI ha

sido el mecanismo para canalizar apoyos para el sistema político y el vehículo para promover carreras políticas de personas que no pertenecen a la red de poder. Indudablemente, algunas logran ingresar y alcanzar alturas políticas relevantes, lo que contribuye a consolidar el mito de que el sistema es igualitario. Pero lo más importante es que el PRI era percibido como el instrumento para la renovación sistémica y la correa de transmisión de demandas y apoyos. Míticamente, era el instrumento que aseguraba la renovación del milenarismo sexenal.

El continuo democratizador mexicano

Para las sociedades que viven bajo regímenes autoritarios o totalitarios, la democracia es un proceso lento y largo, tanto más para quienes la estudian y la viven y desean verla avanzar con mayor velocidad. La brecha entre avance democrático ideal y real tiene un efecto psicológico negativo, porque los ciudadanos no solamente quieren tener los beneficios de la democracia en su vida presente, sino porque la visión de tiempo del ser humano contrapone el tiempo individual al tiempo social.

Un posible acercamiento a la democratización mexicana puede hacerse en torno al proceso electoral, en especial las elecciones para la cámara de diputados. Las elecciones son teóricamente el instrumento creador de consenso y legitimidad, mientras que el congreso es un factor de equilibrio en contra de la concentración de poder. En México, el congreso ha sido históricamente controlado por el poder ejecutivo. A partir de los 50, cuando se introducen los diputados de partido electos en base a la proporcionalidad, sirve como un medio de conducción de la protesta y foro de denuncia¹⁰. El congreso mexicano ha sido una válvula de escape que el gobierno ha utilizado para mostrar avance democrático (Schmidt, 1981)¹¹.

Para los gobiernos priístas, hacia los años 50, empezaba a resultar incómodo no tener una oposición visible en el congreso¹². Esto no solamente reforzaba su imagen de régimen autoritario, sino que también ponía de manifiesto que las fuerzas disidentes en el país no tenían más que vías marginales para influir, como podía ser la rebelión. Este era el caso para todos los sectores sociales, en virtud del monopolio priísta que reproducía la imagen política del "*carro completo*" (González Ramírez, 1974), originada a principios de siglo, y que implicaba copar los espacios de participación política con el grupo en el poder. Dicho en otros términos, si aceptamos la imagen que los sistemas políticos son ollas de presión, al sistema político mexicano le faltaba una válvula de escape.

En 1958 se establece la ley que determina que pueden existir diputados de partido en base a una representación proporcional, la cual, al asegurar la representación de la oposición en la Cámara de Diputados, garantizaba cuatro condiciones: abre la puerta para que las minorías tengan representación; supone una ganancia política para la sociedad; bloquea la posibilidad de que la

oposición llegue al senado, y mantiene la supremacía priísta en la Cámara de Diputados. Esto implica que el PRI podía determinar los componentes y su proporción en la cámara. Cuando la oposición se empieza a fortalecer, la última condición queda asegurada con la elevada posibilidad de realizar fraudes electorales. Por último, en 1990 se modifica la ley, introduciéndose una “*cláusula de gobernabilidad*”, por medio de la cual se garantiza el control de la Cámara de Diputados al partido que reciba el 35% de los votos.

Para los 70, el país requería nuevamente modernizar la canalización del conflicto, dado el brote de serias manifestaciones estudiantiles, obreras, campesinas y guerrilleras. Otra vez se escoge el poder legislativo para este propósito. En 1973 se reduce la edad mínima de voto a los 18 años, se reconoce que las condiciones democráticas anteriores eran limitadas y se anuncia una “*Apertura Democrática*”¹³, en la que se reconoce al Partido Comunista y se le permite salir de la clandestinidad y se amplían las posibilidades de representación, a la vez que se facilita la formación y registro de partidos políticos. Esto aumenta la representación de la oposición en la cámara, en tanto se resguardan las cuatro condiciones mencionadas. En 1977 el gobierno va más adelante y mediante otra ley electoral amplía las dimensiones de la representación, incrementando el número de curules en la Cámara de Diputados. El logro político reside en la parlamentarización del conflicto, pero siempre cuidando las cuatro condiciones mencionadas, mientras que el PRI retiene el monopolio y control del proceso electoral.

En 1986 el gobierno mexicano modificó la ley una vez más, a fin de entregar un beneficio político en el contexto de una seria crisis económica, ampliando el margen de elección para las minorías y reduciendo los requisitos legales para registrar partidos políticos. De esta manera se llega a las elecciones de 1988, en las que, por razón de las alianzas electorales, se registraron cuatro candidatos presidenciales que representaban a 8 partidos políticos. El resultado de los comicios fue que el candidato presidencial del PRI recibió la menor votación en la historia de ese partido, en tanto que la oposición ganó un sorprendente 48% de la Cámara de Diputados, derrotando a candidatos promovidos por la maquinaria político-electoral del PRI. De no haber sido por la división de la oposición, el PRI solamente hubiera ganado dos de las cuarenta diputaciones del Distrito Federal¹⁴.

Para los 80, México registró una configuración política multipartidista, que por sí misma no es garantía de democracia. Un régimen autoritario puede registrar a varios partidos compitiendo por el poder a través de elecciones sistemáticas. En el caso mexicano, no se puede establecer una correlación directa entre número de partidos y democracia, entre otros, porque mientras el papel del presidente continúe siendo protagónico, por encima de los demás poderes y con la capacidad de negociar los resultados electorales, el sistema será de autoritarismo multipartidario.

La variable ideológica también es importante. Junto con el mutipartidismo, se han ido reduciendo las variaciones ideológicas, de tal forma que la sociedad

se va quedando sin opciones reales. Valga ejemplificar describiendo el viraje del Partido Comunista Mexicano (PCM). Poco tiempo después de su legalización en los 70, el PCM se fue moviendo paulatinamente hacia el centro. Primero eliminó lo comunista para llamarse Partido Socialista Unificado de México y, más adelante, simplemente Mexicano Socialista. El siguiente paso fue nominar a un candidato presidencial no marxista (Heberto Castillo) y, por último, a través de una coalición con una escisión priísta — aunque ésta se considere izquierdista —, se convirtió en Partido de la Revolución Democrática (PRD), reivindicando a la caduca y obsoleta revolución mexicana (Schmidt, 1990). Este proceso le hizo perder su identidad de izquierda y su espacio de poder. Hoy por hoy, la influencia política de los comunistas mexicanos es casi nula.

Mientras tanto, los mexicanos tienen un espectro ideológico mayoritariamente centrista, donde la cuestión en debate es quién interpreta con mayor fidelidad el ideario de la revolución de 1910. Es muy posible que esta estructura partidaria, en la que la sociedad tiene tan pocas opciones¹⁵, convencida de su poca influencia, haya alejado al mexicano de las urnas, despojando el sistema político de la capacidad de creación de consenso.

La abstención electoral

Otra de las grandes paradojas de la democratización mexicana es que, aun cuando se ha reconocido a partidos políticos proscritos, como el Partido Comunista, y facilitado la aparición de nuevos partidos políticos, los mexicanos no han optado por volcarse sobre las urnas. Sin ser la abstención electoral un fenómeno únicamente mexicano, puesto que se registra en muchos otros países, hasta ahora no existe ninguna explicación plausible sobre las causas de la abstención mexicana. Butler, Pick y Jones, citando a Langley (1988: 255) en Butler y Bustamante (1991: 18), especulan considerando que las principales causas de la abstención en el pasado “*probablemente fueron: (a) La inevitabilidad de las victorias del PRI*” y (b) la inhabilidad, por cualquier razón, de la oposición de izquierda y derecha por desarrollar una base de apoyo lo suficientemente amplia como para constituir un reto para el partido en el poder. Ambos argumentos son endebles. El primero se puede negar en base a las elecciones de 1988, cuando el PRI tuvo frente a sí a Cuauhtémoc Cárdenas como un contrincante confiable y un menú de opciones ideológicamente variado, y, sin embargo, la abstención llegó a la cifra récord del 66%¹⁶. El segundo argumento falla si analizamos los múltiples reclamos de la oposición en torno al fraude electoral, lo que implicaría que los partidos han recibido suficientes votos como para ganar elecciones y que el partido dominante se ha orillado por hacer trampa en las urnas a fin de mantenerse en el poder.

La abstención electoral constituye hasta tal grado un motivo de

preocupación, que el discurso político de los partidos se ha concentrado en la lucha contra ella, si bien por distintos motivos. La oposición sostiene que a causa de la abstención el fraude electoral se refuerza, mientras que para el PRI, la abstención inhibe la creación de consenso. Lo cierto es que nadie oculta su preocupación por las alarmantes dimensiones que ha alcanzado este fenómeno de negativa. Los políticos, afanados por mantenerse en el poder, son incapaces de leer los deseos de la sociedad y, en lugar de reconocer el descontento social y la alienación del votante, reducen el problema a una falla de información.

Mi explicación, esbozada en otro trabajo (Schmidt, 1990), es que la sociedad mexicana se abstiene de votar porque en su cultura política sienten que no tienen capacidad de influir, y que el voto no puede generar ninguna ganancia, ni siquiera en el sentido esbozado por Downs (1957) de que el voto se puede razonar en base a una ganancia económica. La vieja práctica mexicana de fraude electoral es un factor inhibitor del voto, pues le demuestra al individuo que su participación no produce ningún resultado y que el sistema electoral no es un medio para ejercer influencia. La sociedad se niega a votar, no porque carezca de suficientes opciones ideológicas, sino porque ellas están lejos de garantizar el resultado electoral. De esta manera, la tasa de abstención electoral ha ido en aumento constante.

El hecho que el gobierno priísta haya reconocido dos victorias del PAN para gobernador podría servir como factor desinhibidor de la apatía electoral. Sin embargo, las persistentes acusaciones de fraude, tales como en Michoacán y Durango en 1992, parecieran atestiguar que el reconocimiento de las victorias de la oposición fueron solamente resultado de la necesidad coyuntural del cambio de imagen internacional para el presidente Salinas en el momento en que negociaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto no quiere decir que la oposición no pueda consolidar sus victorias, cosa que el PAN demostró en Baja California, donde en 1991 ganó su primer senador y en 1992 aumentó su control al 75% de los municipios, pero tampoco significa que suponga el inicio de la democratización mexicana.

La disputada elección de 1988 representa un hito en la historia de México por distintas razones, pero no se puede afirmar que constituya el paso a la democracia.

Qué pasó en 1988

La elección de 1988 puso en entredicho el principio de lealtad y disciplina sobre el que se sustentó el sistema durante décadas. Tradicionalmente, los grupos políticos que competían por el poder aceptaban su derrota, convencidos de que habrían otras oportunidades y que el sistema los recompensaría. Los dos grandes bloques políticos, el que surge de la influencia de Cárdenas y el que surge de la influencia de Alemán, que históricamente habían contendido por el poder (Schmidt y Gil, 1992), llegan a un punto de

enfrentamiento y no entendimiento que, a fin de cuentas, provocó una escisión en el PRI y llevó a la formación de un nuevo partido político. Si bien esto puede ser democráticamente sano, también puede introducir elementos de inestabilidad para el sistema, ya que el grupo que retuvo el control del PRI y del gobierno no está dispuesto a enfrentar las consecuencias democratizadoras del rompimiento y puede escalar la represión y el fraude. De hecho, en solamente tres años, más de 140 militantes del PRD han sido asesinados¹⁷. Igualmente, la oposición ha protestado contra el extenso fraude electoral en las elecciones para gobernador realizadas durante 1992 en Veracruz, Oaxaca, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán.

Otra de las dimensiones relevantes de esta elección se refiere al proceso pre-electoral. En estos comicios, al igual que en 1976, el gobierno abrió un proceso de pre-selección de candidatos a la presidencia. Dos de los seis candidatos¹⁸, Bartlett y del Mazo, eran hijos de ex gobernadores, y dos, del Mazo y Salinas, eran hijos de ex secretarios de Estado. No menos significativo resulta comprobar que de los dos contendientes que recibieron la mayor cantidad de votos¹⁹, uno es hijo de un ex presidente (Cuauhtémoc Cárdenas) y el otro es hijo de un ex secretario de Estado (Carlos Salinas). La familia revolucionaria mexicana se volvió endógena, convirtiéndose en un bloque cerrado que puede proveer candidatos oficiales y de oposición, lo cual tiene una implicancia anti-democrática importante, pues muestra que el reclutamiento político se ha restringido al monopolio de poder de un grupo limitado.

Una revisión al concepto de deterioro del presidencialismo y su implicancia democrática

Cuando escribí sobre el deterioro del presidencialismo mexicano (Schmidt, 1991) sugerí que el presidente mexicano es el actor político que más poder controla, pero no puede considerarse todopoderoso. Existe una serie de factores que limitan el poder presidencial y que pueden hacer que éste disminuya coyunturalmente en forma drástica, o bien que el deterioro sea paulatino, a lo largo del tiempo.

La estructura política tiene que contender con la modificación que sufren las fuerzas políticas y su interacción en el desarrollo económico. El deterioro del presidencialismo implicó que el presidente tuviera menor capacidad para subordinar a todos los actores económico-políticos que modificaban su comportamiento conforme la economía evolucionaba. Luis Echeverría, por ejemplo, después de apoyar a una corriente sindicalista a fin de forzar una apertura sindical, termina reprimiéndolos, forzado por el embate del sindicalismo oficial. José López Portillo siente la fuerza de los banqueros que habían concentrado excesivo poder y acaba estatizando los bancos. Miguel de la Madrid, ante la fuerza de la solidaridad espontánea que reemplaza la

inmovilidad del gobierno en el auxilio después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, aprovecha la crisis económica para forzar un pacto social que ayuda a frenar la inflación, pero que agudiza la inequitativa distribución de la riqueza y debilita a las organizaciones sociales y políticas ante sus bases.

Carlos Salinas de Gortari aprovechó las modificaciones económicas del sexenio anterior y ha continuado minando el corporativismo. De hecho, el debilitamiento de los sectores corporativizados y su no reemplazo son una condición necesaria para su reforma económica, la cual está oligarquizando la economía al concentrar en un pequeño grupo el control de ésta: desde el control de los bancos hasta las empresas paraestatales más productivas²⁰. Este cuadro atenta contra la democracia, porque está eliminando el juego político y la competencia que el marco corporativizado creaba y que tantos beneficios políticos aportó a lo largo de los años. La minimización de estos poderes facilita la desaparición de los poderes que equilibran el gran capital.

Los sindicatos han empezado a perder el control de sus bases, lo cual era uno de los objetivos perseguidos por el gobierno, y los grupos campesinos no pueden seguir encabezando la lucha por la tierra — porque ya no hay tierra que repartir —, además de estar debilitados por las múltiples historias de corrupción y colusión con el gobierno. Las organizaciones de masas que se corporativizaron sirviendo al sistema político, beneficiándose también, ahora se encuentran ante un gobierno que dispensa de ellas, de tal forma que ya no pueden gestionar eficientemente las demandas de sus agremiados, carecen del apoyo del gobierno y deben enfrentársele a fin de poder recuperar la credibilidad ante sus bases, pero el enfrentamiento puede resultar en un ataque despiadado del gobierno. Los casos del sindicato de trabajadores de PEMEX y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos líderes fueron expulsados ignominiosamente y el primero fue encarcelado, son una muestra bastante interesante de esta situación.

Los sindicatos ya no pueden ofrecer posiciones políticas a sus líderes y las organizaciones empresariales entienden que la relación con el gobierno cambió; por ejemplo, ahora se habla de mejorar la captación de impuestos. En 1991, el gobierno decidió una cuota de 400 empresarios a ser encarcelados por evasión fiscal en todo el país²¹. Los partidos políticos que funcionaron como títeres del PRI, como el Partido Popular Socialista (PPS)²² y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), han tratado de desenvolverse de manera independiente. El PAN, por su parte, es el único que ha tenido triunfos relevantes.

Los triunfos del PAN, que parecerían indicar el surgimiento de la democracia mexicana, bien pueden mostrar en el corto plazo un sistema autoritario con mayor participación de la oposición, pero no una democratización del sistema político. Muchos rumores recorren México insinuando arreglos tras bambalinas y negociaciones secretas para facilitar los triunfos panistas. Uno de ellos, que vale la pena repetir por su sofisticación, concierne el triunfo del PAN en Chihuahua en julio de 1992, y el cual este autor

reprodujo en un editorial periodístico²³:

“Parece un cuento de Ciencia Ficción pero está recorriendo México con gran velocidad.

La historia de que el presidente Carlos Salinas se quiere reelegir vuelve con más fuerza, ahora en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio.

Quienes repiten el rumor, aseguran que para Salinas no solamente es importante la firma del Tratado, sino garantizar su implantación. Este proceso tardará aproximadamente 15 años y el único que puede garantizar que tal cosa pase es Salinas.

Siempre siguiendo el rumor, se dice que el presidente hará una maniobra para alargar su período presidencial en tres años, durante este tiempo asegurará conformar a las cámaras de Diputados y de Senadores para que luego apoyen una modificación a la constitución para que se pueda reelegir por seis años. Esto nos da un total de quince años en el poder.

Si el Tratado entra en funciones en 1994, a Salinas le quedaría ese año y nueve más para asegurar que el Tratado y sus modificaciones estructurales se consoliden. Para el sexenio siguiente, se piensa que Salinas seguramente lograría imponer al presidente, de tal forma que este grupo político podría controlar la política mexicana por los próximos cuarenta años por lo menos.

En este contexto se explica el triunfo del PAN en Chihuahua. Se dice que Salinas facilitó el triunfo panista para afianzar una alianza con este partido que facilitaría la ampliación de su gobierno. En este momento Salinas no tiene mayoría en el congreso para modificar la constitución y lograr la extensión de su mandato, por lo que necesita una alianza para lograrlo. El PRD no aceptaría hacerlo y se opondría vigorosamente, pero si el PAN apoya, el PRD se encontraría ante un proceso legal consumado y su oposición podría verse orillada a la ilegalidad y sujeta a la represión.

El PAN apoyaría porque tal y como se ven las cosas, todavía no está en condiciones de ganar en 1994 y los neopanistas, actualmente en el poder en ese partido y en tres Estados de la República, haciendo gala de pragmatismo, seguirían su enfoque incrementalista y le arrancarían más concesiones a Salinas a cambio de apoyar la extensión de su gestión presidencial.

El PAN se beneficiaría de los errores locales del PRI y de la postura de respeto electoral de Salinas para seguir cosechando gobernaturas, presidencias municipales y legisladores locales, confiando en que esta alianza estratégica les permita aumentar su poder y poder pelear seriamente por la presidencia en el año 1997.

Mientras tanto, este escenario debilitaría seriamente al poder legislativo y al PRI. El primero de por sí está desprestigiado y parece ser poco efectivo, y para el segundo, los gobernantes actuales sienten que pueden usarlo en base a su popularidad personal o a la manipulación electoral como en Michoacán y Durango. En cambio, esto le daría tres años primero de oportunidad para reforzar su poder personal a Salinas y la posibilidad de modificar la constitución para su reelección, la cual no le caería nada mal al PAN si siente que para 1997 puede tener posibilidades de ganar la presidencia y de mantener ahí a su candidato por 12 años.

La sociedad mientras tanto, ahí está manipulada y sujeta a las maquinaciones que hacen los políticos. Pero como dije al principio de esta columna, como esto parece un cuento de Ciencia Ficción, qué importa lo que piense o sienta la sociedad.”

Los oscuros manejos en la política mexicana posiblemente sean una de las razones por las cuales ni siquiera los triunfos del PAN han logrado devolverle la credibilidad al sistema político mexicano, y sin ésta es difícil hablar de democratización.

La continuidad del deterioro del presidencialismo como sistema facilita el recurso autoritario. Si bien Salinas es un presidente administrativamente fuerte, políticamente no lo es tanto. La paradoja es que para continuar la dominación de su grupo en el poder, al que en algún otro lado hemos denominado “*los financieros*” (Schmidt y Gil, 1991), ha atacado algunos de los elementos políticos fundamentales de la estructura política mexicana. Los presidentes burócratas modificaron el papel de equilibrio y competencia del gabinete presidencial y han orillado el sistema en general a un manejo gerencial de la política. La mejor prueba de esto viene a ser la elevada intromisión de Salinas en los gobiernos estatales, en los que se ha obligado a renunciar a los gobernadores que no lograron “*neutralizar*” a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, como los de Michoacán, Baja California y el Estado de México²⁴. Al cerrar las puertas a otros grupos políticos, eliminaron la disciplina y lealtad características del sistema. Este es el caso de la Corriente Democrática del PRI, que en 1988 terminó abandonando el partido.

El relativo debilitamiento de los otros factores de poder es responsable del aumento del poder de intervención del presidente en política local. Tal vez más que nunca su poder de imponer candidatos es elevado, pero también enfrenta un mayor rechazo por parte de la sociedad y mayor predisposición a seguir a los partidos de oposición. Los brotes de violencia política motivada por el fraude electoral se han extendido a buena parte del país. Como consecuencia, el gobierno mexicano no tiene la suficiente base social de apoyo para negociar internacionalmente e imponer su programa económico en el ámbito doméstico. Quizás ésta sea la razón de que se haya creado el Programa Nacional de Solidaridad, orientado, según los heraldos del gobierno, a “*luchar contra la*

pobreza”, aunque en realidad busca relegitimar al gobierno y al presidente en especial.

Este esquema es arriesgado y pone al gobierno en el filo de la navaja, de tal forma que México puede encontrarse, en el mediano plazo, en la disyuntiva del fin del autoritarismo, ante dos alternativas: democracia sin PRI o totalitarismo, aunque este último no por fuerza sea militar.

Esbozo de un escenario pesimista para la elección presidencial de 1994

El presidente Salinas ha concentrado su estrategia de gobierno en el frente económico, especialmente en el adelgazamiento del Estado, traducido en la venta de empresas paraestatales y la eliminación de subsidios, y en la continuación de la apertura comercial cuyo máximo logro parece haber sido la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el otro lado de la moneda es que las perspectivas de equilibrio macroeconómico no se han dado, por cuanto el déficit en la balanza comercial ha aumentado desmesuradamente. En el frente doméstico, ha continuado el deterioro en la calidad de vida de los mexicanos. Hasta ahora, México ha tenido la suerte de que Estados Unidos le sirve como válvula de escape para la masa de desempleados o de individuos en una situación económica desastrosa. Mas todo tiene su límite. Si para 1994 la calidad de vida no mejora, o por lo menos deja de deteriorarse, el PRI puede enfrentar una sucesión presidencial problemática, por no decir más.

En 1989, Salinas facilitó lo que se percibe como la democratización del país, al reconocer el triunfo del PAN en Baja California. En 1992, se reconoció el triunfo del PAN en Chihuahua y, en un agudo conflicto social, se forzó a renunciar a los candidatos priístas triunfantes en Guanajuato y San Luis Potosí, designándose en el primer estado a un panista como gobernador suplente. Pero esto, más que una estrategia de democratización, respondió a fallas en el PRI y tropiezos del gobierno para arreglar un cuadro político conflictivo derivado del fraude electoral. De hecho, la falta de habilidad en el manejo del conflicto parece haber sido una característica del régimen Salinista. Esto tendrá fuertes repercusiones en la sucesión presidencial.

Durante 1991, el rumor de que Salinas intentaría la reelección recorrió México. En 1992, el rumor ha reaparecido con más fuerza y con la variante de que el PAN sería cómplice. La implicancia para la democracia, de ser esto cierto, identificaría en el PAN un socio menor del autoritarismo mexicano.

Si no hay reelección, Salinas seguramente tratará de imponer a algún miembro de su grupo y generación como candidato presidencial. Sin embargo, la modificación económica en curso, que está oligarquizando la economía, facilitará la intervención de los grandes empresarios en la elección del candidato, rompiendo con el viejo acuerdo de caballeros que establecía que los empresarios no intervendrían en política y el gobierno los apoyaría para hacer

sus negocios. Esta intervención podría interpretarse como un indicador de democratización, pero bien puede ser todo lo contrario, pues aspiraría únicamente a perpetuar la política actual, con todo su componente anti-sindical y para perjuicio de los grupos campesinos, apoyando la eliminación de la idea multipartidaria a cambio de un sistema tri-partidista, en el cual el PRI jugaría a ser el centro. El viejo sistema corporativo cedería el paso a un sistema de presidencialismo fuerte donde los grupos sociales, sin capacidad de organización y representación propia, se le subordinan. Este es, de hecho, el contenido del PRONASOL, que busca redefinir la imagen y el rol del presidente como el único capaz de traer el bienestar a la sociedad.

La popularidad que Salinas está alcanzando la está logrando a costas del PRI, y este deterioro puede minar el sistema actual en varias direcciones. La anteriormente poderosa Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha indicado su deseo de crear un nuevo partido político. Si su presión y la de los grupos campesinos sobre Salinas y el nuevo candidato no fructifica, posiblemente brinde apoyo al PRD, en cuyo caso, según se prevé, Cárdenas será su candidato presidencial. Este proceso crearía la posibilidad de un presidente priísta sin el PRI, pero con cierta influencia de la izquierda, más la reconstitución de parte del viejo corporativismo, lo cual tampoco es una garantía de democracia.

Una negociación entre Salinas y el nuevo candidato con las grandes centrales obreras y campesinas puede reconstituir el viejo corporativismo, a lo cual la reforma económica tendría que adecuarse y, tal vez, modificar su rumbo. Sin embargo, el reparto del poder sería tradicional y se ubicaría en posiciones legislativas o en el nivel municipal, creando poco impacto real.

Las pequeñas fuerzas no abandonararán su postura oportunista, con tal de sobrevivir. Los grupos que se ocupan de temas específicos, como por ejemplo el Partido Verde (ecologistas), han de experimentar, tal vez, grandes sorpresas. Dado que la manipulación de la sociedad será muy desconcertante y no menos frustrante, la sociedad buscará en esos grupos un receptáculo en el cual vaciar su descontento. Esto puede orillar al PRI a buscar la cooptación y corrupción de estos grupos, y distorsionar el apoyo democrático que reciban.

Es poco probable una coalición entre el grupo Salinas y el PRD, pero sí una fuerte oposición y radicalización del último, con lo que las posibilidades de conflicto político pueden aumentar. Cuando el PRI tome conciencia de la dimensión de su debilidad política, posiblemente enloquezca y trate de manipular fraudulentamente la elección, lo cual tiene el potencial de disparar la política.

Conclusión

La percepción del continuo democratizador que el PRI ha conducido en México se ha visto ensombrecida por un continuo represivo que mezcla la

represión selectiva (persecución de líderes) con la represión masiva (como la matanza de Tlaltelolco en 1968). Para el gobierno, la democratización ha respondido a la necesidad de crear consenso mediante el estímulo de la competencia, aunque siendo ésta limitada y controlada. Es posible que el PRI haya deseado que la competencia no creciera hasta el punto de constituir un reto.

La democratización mexicana es formalista, de carácter legal, y se lleva a cabo por decreto gubernamental, con el apoyo de leyes que se han acomodado para mantener el dominio del PRI. Como el PRI controla el congreso, siempre ha tenido los medios de asegurar la continuación histórica de este control. En este sentido, el consenso es forzado, de acuerdo a las necesidades del régimen, y no responde a la idea convencional de democracia, que, entre otras cosas, implica transparencia en el juego político, tolerancia a la disidencia y respeto a los resultados electorales.

La democratización mexicana ha sido vertical, de arriba hacia abajo, respondiendo a las necesidades del poder y no a los deseos de la sociedad. Si bien el sistema implicó la distribución de bienes políticos frente a la mala distribución de bienes económicos, parece ser que esta recompensa queda lejos de la forma en que la sociedad hubiera preferido la democratización.

Las reformas electorales no parecen seguir un ciclo definido; al contrario, no son más que reacciones ante conflictos sociales, siendo posible distinguir una cierta relación entre grandes brotes sociales y las leyes electorales. En los años 50, el conflicto de ferrocarrileros y de maestros pudo haber precipitado la creación de los diputados de partido; en los 60, los conflictos médicos, estudiantiles, la tendencia autonomizadora de los obreros, los movimientos campesinos independientes y la autonomización de la organización empresarial pueden haber impulsado los esfuerzos en pos del voto de los jóvenes de 18 años. Las formas de rebelión — como la guerrilla — quizás hayan impedido las reformas de los 80, cuando se amplió el número de curules y se facilitó el registro de nuevos partidos políticos.

Las múltiples expresiones de rebeldía hacen sospechar que la sociedad tal vez no ha aceptado del todo la vía electoral como solución del descontento, y ha buscado otras formas de actividad política extra-partidarias, a las que el Estado ha respondido con represión. No obstante, es indudable que ha habido un cierto, aunque limitado, continuo democratizador, evidente por lo menos en lo que se refiere a facilitar el acceso al congreso como medio de representación para las minorías. Es por esto que llama la atención que el PRI no haya demostrado interés por presentarse como el partido de la democracia. La única razón que viene a la mente es que, si lo hiciera, tal vez se vería obligado a reconocer derrotas electorales, mientras que todavía puede controlar elecciones y “demostrar” que sigue constituyendo la única opción partidaria.

El proceso electoral de 1988 puso en cuestión el razonamiento anterior al mostrar que las vulnerabilidades del PRI son tal vez más profundas de lo que

comúnmente se piensa, como también, quizá, lo sea su rechazo y resistencia a la democratización. La escisión en el PRI y la creación de un nuevo partido político fuera del control del gobierno son el resultado de un largo período de intolerancia y monopolio del poder, pero también son una lección para los mexicanos de que sí pueden lograr el cambio político, aunque por ello deban pagar un costo muy alto, cosa que atestiguan los más de cien muertos del PRD en solamente tres años.

La incapacidad o falta de voluntad del grupo dominante para asegurarle a los miembros del partido sus posibilidades de movilidad política y acceso a posiciones superiores no solamente causó una escisión partidaria importante en 1988, sino que ha seguido provocando otras más pequeñas en varias partes del país. Si bien esto puede ser democráticamente sano, también puede introducir elementos de inestabilidad para el sistema, porque el PRI se debilitará y la lealtad y disciplina que tanta estabilidad le dieron al sistema político mexicano podrán desaparecer. Cada vez con mayor frecuencia se escucha entre los priistas en México la intención de formar nuevos partidos políticos, lo que no es una garantía de democracia. Tampoco es una voluntad democratizadora la que ha dado lugar a este proceso, sino un rompimiento derivado de la cerrazón política y la falta de democracia. Asimismo, es muy posible que ello conduzca a que se recurra al fraude electoral cuando los resultados electorales sean indeseables para el grupo gobernante, cosa que a su vez puede generar situaciones desagradables. Ya es frecuente leer informes sobre violencia política después de los procesos electorales.

Las manifestaciones de violencia política y no política que han azotado a México desde 1988 se han enfrentado con la mano dura de un gobierno que no está dispuesto a tolerar retos a su capacidad de control. Este mismo gobierno ha tenido que gobernar para legitimarse frente a una sociedad que le mostró su repudio negándose a votar en 1988. Con este objeto, Salinas de Gortari inició una política de “colección de cabezas”²⁵, para demostrar que podía limpiar el sistema político, y la consolidó con un proyecto de populismo tecnocrático que busca engrandecer su imagen como un presidente que se preocupa por esos mismos pobres a los que ayuda a empobrecer con su política económica. Aparentemente, Salinas piensa que este tipo de política le conferirá la legitimidad y el consenso que no consiguió en las urnas. Hasta el momento, parece darle la razón la gran popularidad de que goza y que le ha facilitado implantar su programa económico con poca oposición, aunque, a cambio, esté debilitando a su partido.

Las condiciones socio-económicas que han construido los presidentes burócratas se han traducido en un deterioro constante de la calidad de vida de la mayoría de la población, creciente desequilibrio económico, debilidad de la soberanía y mayor dependencia de las decisiones de Estados Unidos. La gran fuga de divisas del pasado parece haberse frenado, lo que no implica ningún compromiso de la élite económica con algún proyecto nacional²⁶. Por el contrario, ésta agudiza la distribución negativa del ingreso y la brecha entre

ricos y pobres se amplía cada vez más, mientras ellos se apoderan de la maquinaria económica del país, oligarquizando la economía y poniéndose a sólo un paso de oligarquizar la política.

Para los presidentes políticos, la paz social constituyó uno de sus objetivos fundamentales. A fin de lograrla, crearon un aparato corporativo y obtuvieron la disciplina y lealtad de los diversos actores políticos, lo que facilitó el manejo del conflicto. Los presidentes burócratas han alterado todo el esquema corporativo, incluido el sistema de recompensas y castigos, y debilitado la lealtad y disciplina en el sistema. Esto no sólo los ha mostrado indecisos en el manejo del conflicto, sino que los ha llevado a los límites de cohesión del sistema político. Si el futuro fuera una simple proyección del pasado, las perspectivas de la democratización en México son escasas, por no decir menos, y el camino para alcanzarla, tortuoso.

NOTAS

1. Fuera de su connotación negativa, el cacicazgo ha sido la única institución política que ha enlazado la sociedad con el estado a lo largo de más de 500 años. Schmidt (1990a).
2. Sobre la familia revolucionaria, ver Campbell (1980), Padgett (1976), Brandenburg (1964), Hansen (1974).
3. El concepto de presidente burócrata (Schmidt 1991), se refiere a los presidentes que se inician en 1970 y que ascienden por méritos burocrático-políticos, y debe contraponerse al de los presidentes políticos, cuyos méritos eran militares, recién terminada la revolución, y luego estrictamente políticos.
4. Los Estados no tienen capacidad impositiva. Los municipios pueden retener el impuesto predial pero requieren transferencias federales y estatales para sobrevivir. Victoria E. Rodríguez (1992) analiza las intenciones de dispersión de poder de la reforma administrativa de 1984 durante la presidencia de Miguel de la Madrid y el casi nulo impacto que ésta tuvo.
5. Utilizo el concepto tecnócrata como convencionalismo. Estoy en desacuerdo en cuanto al uso que se le da para analizar a los políticos mexicanos por dos razones. Primero, mucha gente identifica como tecnócratas a aquéllos que han terminado estudios de posgrado, con lo que la connotación del concepto se amplía hasta perder significado. Si bien es correcto que los últimos 3 presidentes han realizado estudios de posgrado, de la Madrid y Salinas lo hicieron siendo altos funcionarios. Esto nos obliga a preguntarnos qué tan necesario fue el grado para que logran éxito político. Si recordamos que desde Miguel Alemán (1946-1952) todos los presidentes mexicanos lograban el mayor grado académico acostumbrado, ¿acaso los consideraremos a todos ellos tecnócratas?
Recientemente, la élite del país se ha inclinado por que sus hijos realicen posgrados fuera del país. La creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por Echeverría tenía la finalidad de incentivar el estudio de posgrado fuera del país. Sería ilógico pensar que los políticos se abstuvieran de aprovechar esta oportunidad. De la Madrid y Salinas parecen haber aprovechado su posición como funcionarios para realizar tales estudios.
Segundo, la gente identifica como tecnócrata a alguien que prefiere soluciones técnicas para resolver problemas políticos. Los presidentes recientes han preferido soluciones burocráticas a problemas políticos, pero han mostrado su gran habilidad política para mantener el poder en sus manos.
6. Son varios los eventos electorales que el gobierno resolvió negociando, desde el ejemplo temprano de la gubernatura de Nayarit en 1975, que trueca con el Partido Popular Socialista a cambio de una senaduría para el líder de ese partido (Hinojosa 1989), hasta la negociación de ciudad de Tecate en 1989, que el PRI gana por 8 votos, a cambio de reconocer la gubernatura, la presidencia municipal de Tijuana y Ensenada y la mitad del congreso local

- para el PAN (entrevistas del autor con funcionarios del PAN y PRI).
7. Echeverría es una mezcla o la transición entre ambos tipos, aunque su mentalidad burocrática influyó más en su desempeño presidencial.
 8. Loveman y Davies sostienen que los militares despolitizan la política. Aquí creo que los presidentes burócratas logran el mismo resultado.
 9. Peter denomina este proceso el "Arabesco Lateral" por medio del cual los incompetentes dentro de un sistema son removidos, en ocasiones manteniendo su mismo nivel simbólico pero despojándolos de su funcionalidad en el sistema (Peter 1977). Una de las prerrogativas del nuevo candidato presidencial es pedirle al presidente la remoción del gabinete presidencial de sus contrincantes. Es así como se explica que al nominar a José López Portillo candidato en 1975, Echeverría enviara al PRI a Porfirio Muñoz Ledo como presidente y a Augusto Gómez Villanueva como Secretario General. López Portillo los neutralizó en el partido estableciendo una estructura paralela de campaña en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI, que dirigía Miguel de la Madrid.
 10. Es interesante que Antonio Gramsci respondió a la crítica que se le hizo al Partido Comunista Italiano por participar en el congreso, que el partido lo hacía para usar al congreso como un medio de propaganda.
 11. Comparte la misma opinión Rafael Segovia "Modernization and Political Restoration," en Butler y Bustamante (1991).
 12. Cothran (1992) aborda la misma cuestión cuando evalúa las elecciones para medir el logro de la democracia social. También hace una buena síntesis de las reformas electorales mexicanas. Se puede ver una síntesis algo apologética de las reformas electorales en Butler y Bustamante 1991: 3-6.
 13. Castillo, Naranjo y Magu (1976) dicen que es "Apretura democrática" y Abel Quezada llegó a decir que era "Apretura Demográfica".
 14. Fundación Arturo Rosenblueth (1988).
 15. El caso extremo fue la reciente elección para gobernador en Chihuahua, donde los candidatos del PRI y el PAN se declararon Salinistas.
 16. Hay elecciones congresionales y municipales donde la abstención llega al 80%. La elección presidencial de 1988 registró la abstención más alta en la historia.
 17. Datos dados a conocer por Cuauhtémoc Cárdenas en una conferencia dictada en el Centro de Estudios Inter Americanos y Fronterizos de la Universidad de Texas en El Paso, septiembre 11, 1992.
 18. Ramón Aguirre, Jefe del Departamento del Distrito Federal. Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación. Sergio García Ramírez, Procurador General de Justicia. Miguel González Avelar, Secretario de Educación Pública. Alfredo del Mazo, Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Carlos Salinas de Gortari, Secretario de Programación y Presupuesto.
 19. Los porcentajes recibidos por cada uno de los candidatos son: Cuauhtémoc Cárdenas (Frente Democrático Nacional, FDN): 31.12%; [El FDN incluyó al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PCFRN), Partido Mexicano Socialista (PMS), Partido Popular Socialista (PPS)]. Manuel J. Clouthier (Partido Acción Nacional, PAN): 17.07%; Gumersindo Magaña (Partido Democrático Mexicano, PDM): 1.04%; Rosario Ibarra (Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT): 42%; Carlos Salinas (Partido Revolucionario Institucional, PRI): 50.36%; datos tomados de Fundación Arturo Rosenblueth (1988).
 20. De 1,155 empresas paraestatales que había en 1982, de la Madrid las redujo a 412 y Salinas las ha llevado a 221. *Mexico on the Record*, México D.F.: Press Office of the President of México. Vol. 1, No. 7. July 1992. P. 3.
 21. Entrevista del autor con un funcionario del gobierno panista de Baja California. El entrevistado solicitó confidencialidad.
 22. Alguien decía que PPS quiere decir Pocos Pero Serviles.
 23. Este segmento se publicó en el periódico *La Opinión* de Los Angeles, con el título "El TLC y la Política," agosto 25, 1992.
 24. Posiblemente esta misma consideración motivó la forma tan vergonzosa como se obligó a renunciar a Ramón Aguirre a la gubernatura de Guanajuato en 1992, aún antes de tomar

posesión, ya que el PRI perdió dramáticamente en el Distrito Federal y el PRD ganó dos de sus cuatro senadurías cuando él era Jefe del Distrito Federal. Se sobreentiende que los funcionarios de mayor rango electoral o de designación están a cargo del control político de la región bajo su jurisdicción. Esto incluye controlar a la oposición.

25. Ernest Becker (1980) analiza el rol de la guerra y la colección de símbolos (cabezas) para alimentar espiritualmente a los vencedores con la vida de los vencidos.
26. El retorno de capital que el gobierno mexicano ha anunciado con fanfarrias es dinero que vuelve a invertirse en la bolsa de valores para después abandonar el país con todo y ganancias. En Entrevista del autor con un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, éste reconoció que los supuestos 20,000 millones de dólares que entraron a México en 1991 no crearon ni un empleo.

BIBLIOGRAFIA

- Becker, Ernest. 1980. *La lucha contra el mal*, México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Brandenburg, Frank R. 1964. *The Making of Modern Mexico*, N.J.: Englewood Cliffs.
- Butler, Edgar W. and J.A. Bustamante. 1991. *Sucesión Presidencial. The 1988 Mexican Presidential Election*, Boulder, Co.: Westview Press.
- Busey James L. 1985. *Latin American Political Guide*, New York: Robert Schalkenbach Foundation.
- Camp, Roederic. 1990. "Camarillas in Mexican Politics. The Case of the Salinas Cabinet." *Mexican Studies*, 6 (1) Winter.
- Campbell, Federico. 1980. *La sombra de Serrano*, México: Proceso.
- Castillo, Heberto, Naranjo y Magu. 1976. *Los agachados, Pinochetazo a Excelsior*, México, D.F.: Posada.
- Cothran, Dan. 1992. *The Electoral Process and Democracy in Mexico*. Mimeo.
- Downs, Anthony. 1957. *An Economic Theory of Democracy*, New York: Harper. (1973). La traducción al español es *Teoría Económica de la democracia*, Madrid: Aguilar. English version.
- Drake Paul W. 1989. "Debt and democracy in Latin America, 1920s-1980s" en Stallings Barbara and Robert Kaufman, *Debt and democracy in Latin America*, Boulder, Co.: Westview.
- Fitzgibbon Russell H. y Kenneth F. Johnson. 1966. "Measurement of Latin American Political Change" en Tomasek Robert D. (Ed.). 1966. *Latin American Politics*, New York: Anchor books.
- Fuentes Carlos. 1970. *La muerte de Artemio Cruz*, México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Fundación Arturo Rosenblueth. 1988. *Geografía de las elecciones presidenciales de México*. México D.F.
- Gil, Jorge, Samuel Schmidt and Jorge Castro. 1991. "Red de un ex-presidente mexicano". *Sunbelt XI International Sunbelt Social Network Conference*. Tampa, Florida. February 14-18.
- Gillin John P. 1966. "The middle segments and their values", en Tomasek Robert D. (Ed). 1966. *Latin American Politics*, New York: Anchor books.
- González Ramírez, Manuel. 1974. *La Caricatura Política*, México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Hansen, Roger D. 1974. *The Politics of Mexican Development*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Hernández Rodríguez, Rogelio. 1991. *La formación del político mexicano. El caso de Carlos A. Madrazo*, México D.F.: El Colegio de México.
- Hinojosa, Oscar. 1989. "Nayarit 1975: Una historia que no deja en paz a sus protagonistas". *Proceso* 674: 22-24. Oct. 2.
- Kaufman Robert R. 1989. "Economic orthodoxy and political change in Mexico: The stabilization and adjustment policies of the de la Madrid administration", en Stallings Barbara and Robert Kaufman. 1989. *Debt and democracy in Latin America*, Boulder, Co.: Westview.
- Loveman, Brian and Thomas Davis eds. 1978. *The Politics of Antipolitics, The Military in Latin America*, Lincoln: University of Nebraska Press.
- Padgett, L. V. 1976. *The Mexican Political System*, Atlanta: Houghton Mifflin Co.

- Paz Octavio. 1982. *El laberinto de la soledad*, México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Peter, Lawrence J. 1977. *El Principio de Peter*, Barcelona: Plaza & Janes.
- Ramos, Samuel. 1934. *The Profile of Man and Culture in Mexico*, U.S.A.: University of Texas Press.
- Rodríguez, Victoria E. 1992. "Mexico's Decentralization in the 1980's: Promises, Promises, Promises." en Morris Arthur and Stella Lowder (eds.), *Decentralization in Latin America*, New York: Praeger.
- Schmidt, S. and Jorge Gil. 1991. "La carrera por la presidencia de México." *Review of Latin American Studies*, 3:2.
- 1992. "The Historical Development of Mexico's Network of Power." *Latin American Studies Association, XVII International Congress*, Los Angeles, CA.
- Schmidt, Samuel. 1992. "El TLC y la Política," *La Opinión*, Los Angeles, CA. Agosto 25.
- 1991a. "La Red de Poder y la Estabilidad Política en México." 39th. Annual Rocky Mountain Council for Latin American Studies. Flagstaff, AZ. February 21-23.
- 1991. *The Deterioration of the Mexican Presidency: The Years of Luis Echeverría*, Tucson: University of Arizona Press.
- 1990. "Las elecciones en la frontera México-Estados Unidos. Revisando las tendencias". *Estudios Fronterizos*. 21 Verano.
- 1990a. "Redefinición de Liderazgos." *Examen*. México D.F. 2: 15.
- 1986. *El deterioro del presidencialismo mexicano*, México, D.F.: EDAMEX.
- 1981. *Democracia Mexicana. La reforma política de José López Portillo. ¿Un nuevo discurso?*, México, D.F.: UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, CELA.